



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

D. JAIME VELÁZQUEZ VIOQUE, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 18 de septiembre de 2003, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

POR EL QUE SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN RELATIVA AL CONFLICTO ENTRE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. Y LAS ENTIDADES PRESTATARIAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE URGENCIA 112 RELATIVO AL IMPORTE DE LA CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA A LA QUE TIENEN DERECHO LOS OPERADORES POR RAZÓN DEL SUMINISTRO DE DATOS DE LOCALIZACIÓN DE LLAMADAS DE MÓVIL A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE URGENCIA 112.

(Exp. RO 2003/888)

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero.- Las entidades prestatarias del servicio de llamadas de urgencia al número 112 de las Comunidades de Madrid, Castilla La Mancha, Aragón, Murcia, Navarra, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Valencia, Galicia, La Rioja, Canarias, Andalucía, País Vasco, Islas Baleares y Cataluña formularon, ante esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, consulta, en marzo y abril de 2003, relativa a cuál es el importe de la contraprestación económica a la que tienen derecho los operadores móviles por razón del suministro de datos de localización de llamadas de móvil a los servicios de Atención de Llamadas de Urgencia 112, y cuáles son los conceptos asociados a dicho importe. Esta Comisión procedió a la apertura de procedimiento con número de expediente MTZ 2003/570 con objeto de dar contestación a la consulta formulada.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En la consulta presentada por las entidades prestatarias, se indicaba que los operadores de telefonía móvil habían desarrollado una solución normalizada para el suministro de datos de localización "on line" de la zona geográfica desde la que se origina la llamada al número 112. Esta solución se materializó en un proyecto piloto de localización de llamadas de móviles en el Centro 112 de Madrid en el ámbito geográfico de esta Comunidad Autónoma. A la vista de los resultados satisfactorios, Madrid 112 decidió implantarlo en su Centro de Atención de Llamadas de Urgencia, encontrándose operativo desde finales de septiembre de 2002.

Segundo.- Al entenderse necesario para la resolución de la consulta inicialmente planteada, se requirió por esta Comisión al Organismo Autónomo Madrid 112 para que comunicara la descripción detallada del servicio de localización de llamadas de terminales móviles en el centro de atención 112, desarrollado por el proyecto piloto que finalmente fue implantado en su Centro de Atención de Llamadas de Urgencias. La cumplimentación de este requerimiento se efectuó por dicho Organismo mediante escrito de fecha 21 de abril de 2003.

Tercero.- De acuerdo con la habilitación competencial que esta Comisión tiene atribuida, se requirió, mediante escritos fechados el día 10 de abril de 2003, a las tres operadoras móviles que hoy prestan servicios de telefonía móvil para que aportaran la siguiente información:

Respecto al servicio de localización de terminales móviles en el centro de atención 112 (localización-112) ofrecido por el operador móvil:

- ✓ Descripción del servicio que el operador móvil actualmente presta o tiene pensado prestar sobre la localización-112.
- ✓ Arquitectura del servicio, incluyendo recursos utilizados (de red, terminales, interfaces, operación y mantenimiento, personal, etc.). Explicación del funcionamiento técnico del servicio de localización 112.
- ✓ Desarrollos realizados para ofrecer este servicio de localización, incluyendo desarrollos de red, base de datos y programas para su manejo. Costes de estos desarrollos.
- ✓ Precios y composición de los mismos para estos servicios.
- ✓ Volumen de uso del servicio de localización-112.
- ✓ Previsiones de evolución del servicio, de manera que se faciliten datos más precisos sobre la ubicación del usuario llamante.

Respecto a servicios de cliente final de localización.

- ✓ Descripción de los servicios de cliente final relacionados con la localización de terminales que, en su caso, se estén ofreciendo a los usuarios.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

- ✓ Arquitectura de estos servicios, comparando la utilización de recursos (incluyendo red, terminales, interfaces, operación y mantenimiento, personal, etc.) con el servicio de localización-112, y explicación de las diferencias.
- ✓ Coste de la prestación de este servicio y composición de éstos.
- ✓ Precios del servicio.
- ✓ Volumen de uso de este servicio y previsión de la evolución de uso para los próximos 3 años.
- ✓ Uso de los recursos según el servicio (localización a clientes finales o localización-112).

Mediante escritos fechados el 19 y 22 de mayo de 2003 RETEVISIÓN MÓVIL, S.A. (AMENA) y VODAFONE ESPAÑA, S.A. (VODAFONE), respectivamente, cumplieron el requerimiento de información anterior.

De igual modo TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. (TME) cumplimentó el citado requerimiento mediante escrito de fecha 16 de mayo de 2003. En el mismo TME solicitaba formalmente la intervención de esta Comisión para resolver la falta de acuerdo adoptado con las CCAA sobre la contraprestación económica a la que tiene derecho el operador móvil por razón del suministro de datos de localización de llamadas de móvil a los servicios de atención de llamadas de urgencia 112.

Habida cuenta de la solicitud de TME, esta Comisión procedió a la apertura de procedimiento administrativo, de acuerdo con la habilitación competencial atribuida, en fecha 16 de mayo de 2003, comunicándolo mediante escritos de fecha 9 de junio de 2003 (expediente RO 2003/888). Considerando que TME plantea la controversia a raíz de la consulta formulada por una serie de CCAA, se entiende que el conflicto se plantea con ellas, ya que tan sólo respecto a estas nos consta su disconformidad, por "EXCESIVOS", con los precios presentados por TME. En relación con la consulta presentada por las entidades prestatarias, se continuó con el procedimiento abierto (expediente MTZ 2003/570), en todo lo referente a VODAFONE y AMENA.

En la contestación al citado requerimiento, TME describía el servicio de localización de llamadas, así como la arquitectura del servicio y las inversiones realizada para poder ofrecerlo. A continuación comunicaba la contraprestación económica resultante de imputar las partidas de inversión y costes de mantenimiento y uso de otros elementos de red necesarios para la provisión del servicio de localización de llamadas de emergencia 112, así como la propuesta de reparto entregada a las Comunidades Autónomas. También se refería su escrito al volumen de uso del servicio de localización y de cómo evolucionaría el servicio hacia mejora en la funcionalidad de acuerdo con la



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

evolución de los trabajos de estandarización de los organismos europeos de normalización.

TME también comunicó la descripción, arquitectura y precios de los servicios comerciales de localización y volumen de uso de los mismos.

Cuarto.- Al entenderse necesario ampliar esta información, y ya en el seno del expediente RO 2003/888, se solicitó a TME que comunicara:

- Desglose y explicación de cada una de las partidas de costes imputadas al servicio, tanto para el “set-up” como para la cuota anual.
- En relación con el criterio de reparto de costes entre las Comunidades Autónomas, partidas incluidas en los costes independientes del volumen de tráfico y en los costes dependientes del volumen de tráfico.
- Vida útil de los elementos involucrados en la prestación del servicio.
- Entendiendo que el servicio de gestión en red móvil de llamadas al número 112 se compone de dos tareas distintas, la primera destinada a la traducción de número 112 y su enrutamiento hasta el centro de atención de llamadas (encaminamiento) y la segunda destinada a localizar la posición del terminal que ha originado la llamada y comunicar esta información a los centros de atención de llamadas (localización), se pide:
 1. Previsión del número de llamadas que requieran tareas de traducción (encaminamiento dependiente de la localización) separado para el número 112 y para otros números, para cada año, durante la vida útil de los elementos.
 2. Previsión del número de llamadas o consultas que requieran tareas de localización separado para el número 112 y para otros números, para cada año, durante la vida útil de los elementos.
 3. Reparto de los costes del servicio según un criterio propuesto por el operador conforme a las distintas tareas realizadas (encaminamiento y traducción).
 4. Los costes resultantes deberán estar separados, al menos, en las siguientes categorías:
 - Tareas de encaminamiento 112 – Set-up
 - Tareas de encaminamiento 112 – Mantenimiento
 - Tareas de localización 112 – Set-up
 - Tareas de localización 112 – Mantenimiento

Con fecha 25 de junio de 2003 TME cumplimentó el requerimiento de información detallando las partidas de costes imputadas al servicio y desglosando para Set-up y cuota anual, el criterio de reparto y la vida útil de los



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

elementos involucrados en la prestación del servicio, así como las funciones de encaminamiento y localización, llamadas de localización del 112 y de otros servicios, y previsión de cada tipo de llamadas con el reparto de costes según funcionalidad.

Quinto.- Mediante escritos, con fecha de entrada en el Registro de esta Comisión de 3, 4, 9, 11, 14, 15 y 18 de julio de 2003, las entidades prestatarias de las Comunidades de Canarias, Baleares, Madrid, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Andalucía, Asturias, Valencia, Castilla-León, Galicia, Navarra, Cataluña y País Vasco reiteraron las consideraciones puestas de manifiesto en la consulta a la que se refiere el antecedente primero.

Sexto.- Una vez instruido el presente procedimiento, con fecha 23 de julio de 2003 se abrió el trámite de audiencia, en el que los servicios de la Comisión informaron sobre las diferentes cuestiones objeto del conflicto, otorgando un plazo de 10 días a las partes, a fin de que alegaran y presentaran los documentos y justificaciones que estimasen pertinentes. Ninguna de las entidades prestatarias ha presentado alegaciones al trámite de audiencia en el plazo legalmente concedido.

Con fecha 12 de agosto de 2003 TME presentó escrito de alegaciones en el que manifestaba su conformidad en parte con la propuesta adjunta al trámite de audiencia. Sin embargo, TME manifiesta su disconformidad con lo establecido en el punto segundo del informe de audiencia, al considerar que el coste que se obtendría al desglosar el mencionado servicio en el Sistema de Contabilidad de Costes no sería homogéneo con el estricto coste que TME tendría que cobrar a las entidades prestatarias del dicho servicio siendo más elevado.

Séptimo.-Alegaciones al trámite de audiencia. Con fecha 8 de septiembre de 2003, Don Raimundo Herraiz Romero, Gerente del Organismo Autónomo Madrid 112, con fecha 10 las Comunidades Autónomas de Castilla la Mancha y Asturias, con fecha 11 las CCAA de la Rioja, Valencia y Castilla y León, con fecha 15 de septiembre el Gobierno de Aragón y de las Islas Baleares y con fecha 16 de septiembre la Junta de Andalucía, presentan las siguientes alegaciones, todas ellas idénticas, que se contestan de forma expresa en el fundamento de derecho séptimo:

- Que no puede aceptarse la interposición de un conflicto cuando una de las partes no ha manifestado disconformidad a la otra parte y que, en este sentido, la Comunidad Autónoma no se ha manifestado en relación con el precio presentado por TME. En concreto, la Comunidad Autónoma alega haber planteado ante la CMT la consulta objeto del



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

expediente MTz 2003/570 con el objeto de valorar los costes propuestos por los operadores móviles.

- Que la aplicación de los principios de eficiencia, causalidad y carga de la prueba en el operador móvil permiten la determinación unívoca del estricto coste sin que sea necesario como sugería el informe preliminar de los servicios de esta Comisión, validar o revisar los costes a través de la posterior contabilidad presentada por el operador móvil.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero.- Habilitación competencial de la CMT para intervenir en el presente procedimiento.

La Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, modificada por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre (en adelante Ley 12/97), en su artículo 1.Dos.1, establece que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tiene por objeto salvaguardar, en beneficio de los ciudadanos, las condiciones de competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios audiovisuales, telemáticos e interactivos.

De igual forma, el artículo 1.Dos.2 letra ñ) de la citada Ley 12/1997 establece que corresponde a esta Comisión cualesquiera funciones que “legal o reglamentariamente se le atribuyan o que le encomiende el Gobierno o el Ministro de Fomento”. En similares términos se pronuncia el artículo 29 del Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Concretamente el artículo 6 de la Orden de 14 de octubre de 1999 sobre condiciones de suministro de información relevante para la prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número 112, en adelante Orden de 14 de octubre de 1999, establece que *“las condiciones de suministro de la información que no hayan sido establecidas expresamente en esta Orden, serán materia de convenio entre las entidades prestatarias titulares del servicio y los operadores obligados. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones resolverá las controversias que puedan surgir entre las partes”*.

Por otra parte, esta Comisión adecuará sus actuaciones a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en lo sucesivo LRJPAC), texto legal al cual, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la citada Ley 12/97 y en el artículo 2 del



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

asimismo citado RCMT, se sujeta la CMT en el ejercicio de las funciones públicas que tiene encomendadas.

Segundo.- Régimen jurídico de la prestación del servicio de localización de llamadas de emergencia.

El acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número de teléfono 112 se regula por el Real Decreto 903/1997, de 16 de junio y por la Orden de 14 de octubre de 1999 sobre condiciones de suministro de información relevante para la prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número 112.

La Ley General de Telecomunicaciones¹, sólo se refiere al número de emergencia 112 en el artículo 40, en la regulación de los servicios obligatorios de telecomunicaciones, al incluirlo dentro de la categoría de obligaciones de servicio público. Concretamente en el apartado 4 se establece que *“el encaminamiento de llamadas a los servicios de emergencia será a cargo de los operadores, debiendo asumir esta obligación tanto los que presten servicio telefónicos disponibles al público como los que exploten redes públicas de telecomunicaciones que soporten servicios telefónicos. Inicialmente, esta obligación se impondrá a los operadores respecto de las llamadas dirigidas al número telefónico 112 de atención a urgencias. (...)En todo caso, el servicio de llamadas de emergencia será gratuito para los usuarios, cualesquiera que sea la Administración Pública responsable de su prestación y con independencia del tipo de terminal que se utilice”*.

En similares términos se refiere el Reglamento del Servicio Universal², en los artículos 37 y 38, delimitando la obligación de prestación de este servicio de urgencia en las Comunidades Autónomas. El artículo 54, por su parte hace, referencia al carácter de gratuidad para el usuario final de este servicio telefónico.

Pero es el Real Decreto 903/1997 antes citado el que regula el correcto acceso a este servicio de atención de llamadas, pudiendo utilizarse con carácter gratuito para el usuario y para casos de urgente necesidad. Para el correcto funcionamiento de este servicio se encomienda a las Comunidades Autónomas a que establezcan los correspondientes centros de recepción de llamadas, pudiendo constituirse en entidades prestatarias del servicio. Éstas adoptarán las medidas necesarias y establecerán los acuerdos o convenios de

¹ Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.

² Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Título III del la Ley General de Telecomunicaciones, en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

colaboración que sean necesarios cuando la prestación de los servicios concretos de urgencia no sean de su titularidad. De esta forma se obliga a los operadores de redes y servicios que encaminen las llamadas al número telefónico 112 hacia un centro de recepción de la entidad prestataria del servicio, estando obligados a asumir el coste del tráfico originado en los puntos de terminación de su red con destino al centro de recepción.

Pero no sólo están obligados a encaminar la llamada, sino también a facilitar la identificación automática de la línea o zona geográfica desde donde se efectúen las llamadas, si bien en este caso, el coste se asumirá por las Comunidades Autónomas.

Por tanto, el coste de la prestación del servicio de las llamadas de urgencia a través del número 112, como servicio público obligatorio de telecomunicaciones, será asumido, en lo referente al encaminamiento de las llamadas, por los operadores de telecomunicaciones, y en lo relativo a los centros de atención de llamadas y demás necesidades para la correcta prestación del servicio por las Comunidades Autónomas.

A estas otras necesidades se refiere la obligación de identificación de línea llamante, así como la dirección del titular de la línea telefónica fija o la localización geográfica, en el caso de los servicios móviles. A este respecto la Orden de 14 de octubre de 1999 establece que los operadores deberán facilitar la zona geográfica desde la que se efectúa la llamada, si bien, en el artículo 5 de esta Orden reconoce el derecho de los operadores *a una contraprestación económica que cubra el **estricto coste** del suministro de la base de datos, del medio o soporte en que se suministra y, en su caso de los programas para su manejo.* Hemos de entender, por tanto, que el coste que supone a los operadores el servicio de localización y notificación de la llamada deberá ser asumido por las entidades prestatarias del servicio.

Tercero.- Resumen técnico del servicio de localización de llamadas en redes móviles.

El encaminamiento de las llamadas a cada uno de los centros de atención de emergencias 112 depende de la posición geográfica del usuario llamante, ya que este número de emergencias 112 tiene asociados ámbitos geográficos menores al nacional.

Desde otro punto de vista cabe decir que una información precisa sobre la posición del usuario llamante es muy valiosa a la hora de atender las situaciones de emergencia, razón por la cual dicha información debe ser comunicada a los centros de emergencia.

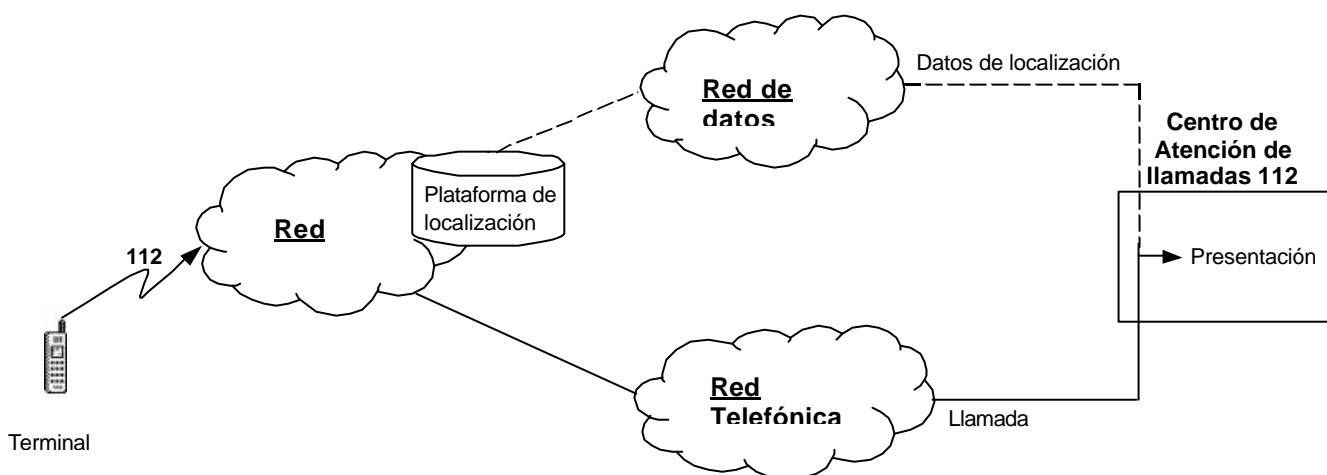


COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Con este fin, y como consecuencia de la obligación impuesta en el artículo 3 del Real Decreto 903/1997 y artículo 2 de la Orden de 14 de octubre de 1999³, los operadores móviles han desarrollado expresamente el protocolo POSIC112 que permite ofrecer el servicio de localización de llamadas de emergencia 112.

Este servicio permite obtener una estimación en tiempo real de la posición geográfica de un usuario móvil que realiza una llamada al número de emergencias 112, comunicando dicha información de localización al centro de atención de llamadas de emergencia 112 correspondiente, donde se presenta asociada a la llamada telefónica establecida con ese centro de emergencias desde ese mismo terminal.

La arquitectura del servicio de localización se muestra a continuación:



Cuando un usuario móvil inicia una llamada al número de emergencia 112, se inician en la red tanto las acciones destinadas a determinar el destino de la llamada (para encaminar la llamada al centro de emergencias que corresponda) como aquellas destinadas a determinar la posición del terminal móvil que ha originado la llamada. Aunque ambas tareas se pueden realizar de

³ Artículo 3 del Real Decreto 903/1997: (...) Dichos operadores facilitarán la identificación automática de la línea o **zona geográfica** desde donde se efectúen las llamadas al número telefónico 112 (...).

Artículo 2 de la Orden de 14 de octubre de 1999: Los operadores obligados a los que se refiere el artículo 1, deberán facilitar (...) las correspondientes bases de datos que permitan relacionar e identificar el número de la línea llamante y la dirección o **zona geográfica** desde la que se efectúa la llamada, en el ámbito territorial de la competencia de aquéllas.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

forma conjunta, son funcionalmente distintas, y así se tratan en esta Resolución.

El elemento sobre el que se basa el servicio de localización de llamadas de emergencia 112 es la plataforma de localización. Esta plataforma contiene una base de datos con cierta información relativa al servicio 112 y realiza la estimación sobre la localización geográfica. La información contenida en esta plataforma también puede ser utilizada para obtener la traducción del número 112.

Una vez que se ha realizado la traducción del número, la llamada se encamina a través de la red telefónica hasta el centro de atención de llamadas 112. Como se ha mencionado, la traducción del número puede utilizar información contenida en la plataforma de localización. Asimismo, debe tenerse en cuenta que existen otros servicios cuyo encaminamiento es dependiente de la posición, como pueden ser otros números de emergencia o servicios comerciales, y que pueden utilizar los mismos recursos que se utilizan para la traducción del número 112.

La estimación de la posición geográfica del usuario llamante se inicia mediante el disparo de una consulta a la plataforma de localización, donde se realiza esta estimación. Una vez que la posición geográfica ha sido determinada, esta información es enviada a través de una red de datos u otros medios de transmisión hasta el centro de emergencias. Al igual que en el caso anterior, debe tenerse en consideración que pueden existir otros servicios comerciales que requieren la estimación de la localización de usuario llamante y que hacen uso de la plataforma de localización.

Una vez realizadas estas acciones, se reciben en el centro de emergencias por un lado la llamada telefónica y por otro lado la información sobre la posición geográfica asociada al terminal que ha originado la llamada. Ambas informaciones se sincronizan pudiendo presentarse a través de sistemas de información geográfica.

Cuarto.- Coste estricto imputable al servicio de localización de llamadas.

Como más arriba se ha indicado, el artículo 5 de la Orden de 14 de octubre de 1999 se refiere al derecho de los operadores a una contraprestación económica que cubra el estricto coste del suministro de la base de datos, del medio o soporte en que se suministre y, en su caso, de los programas para su manejo.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Ha de entenderse que este estricto coste se refiere no sólo al servicio de suministro de información de localización para redes fijas, sino también para redes móviles, según lo establecido más adelante.

En el Real Decreto 903/1997 se define claramente cuáles son los costes que tienen que asumir los operadores de redes y servicios. Concretamente en el artículo 3.1 se establece que *«los operadores de redes y servicios antes citados (...) vendrán **obligados a asumir el coste del tráfico** originado en los puntos de terminación de su red con destino al centro de recepción de llamadas de la entidad prestataria del servicio de atención de llamadas de urgencia 112 que corresponda, en virtud de su especial relación con la administración derivada de su título habilitante»*. Se identifica sólo el coste del encaminamiento de la llamada, pero no se hace referencia, en ningún momento, a que los operadores móviles tengan que asumir el coste derivado de la localización geográfica de las llamadas.

A mayor abundamiento, la Orden de 14 de octubre de 1999 reparte entre dos entidades los costes derivados de la prestación de este servicio de llamadas de urgencia. De esta forma se establece en la Exposición de Motivos de la citada Orden que *«Por tanto, de los preceptos citados se infiere que el coste de la prestación del servicio de llamadas de urgencia a través del número 112, como servicio público obligatorio de telecomunicaciones, será asumido, en lo referente al encaminamiento de llamadas, por los operadores de telecomunicaciones, y en lo relativo a los centros de atención de llamadas, y demás necesidades para la correcta prestación del servicio, por las Comunidades Autónomas»*. Esta Orden de 14 de octubre de 1999 desarrolla las condiciones de suministro de información relevante para la prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia, estableciendo como información obligatoria a suministrar la identificación de la línea llamante. En el artículo 1 se configura esta obligación dependiendo del tipo de red. Así para el caso en que la llamada se origine en una red fija, se deberá facilitar la información de la dirección de la línea desde donde se produce la llamada, siendo necesario para ello, que se facilite por el operador la base de datos que permite relacionar e identificar el número de la línea llamante y la dirección. Para el caso de que la llamada se origine en una red móvil se deberá facilitar la situación de la celda, o sea, la zona geográfica. Para este servicio en general, es decir, para el suministro de la información relevante, es para lo que reconoce el artículo 5 el derecho de los operadores obligados a una contraprestación económica que cubra el estricto coste de la prestación de este servicio.

Esta Comisión ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre qué ha de entenderse por coste estricto en la prestación de este servicio de localización de la llamada, si bien, no referido a las llamadas originadas en redes móviles,



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

sino a las originadas en redes fijas de telecomunicaciones, en concreto al coste de suministro de la base de datos. Así, en el procedimiento ME 2002/2415 se analizaron los costes estrictos imputables al suministro de la base de datos a que se refiere la Orden de 14 de octubre de 1999 en su artículo 5.

Ya se apuntaba en esta Resolución que la contraprestación económica a la que tienen derecho los operadores móviles coincide, necesariamente, con el estricto coste del suministro, y esto como consecuencia de la caracterización del servicio de llamadas de urgencia 112 como servicio público. En consecuencia, tal y como ponía de manifiesto la Resolución de 20 de julio de 2000: *el coste estricto deberá cumplir, entre otras, las siguientes reglas:*

1. *Eficiencia. El coste ha de considerarse con criterios de eficiencia.* De modo que los recursos utilizados por el operador sean los justamente necesarios para la realización de este servicio, impidiendo así que las ineficiencias del operador graven la actividad de la entidad que presta el servicio de emergencias 112.
2. *Carga de la prueba en el operador que alega el coste. Es decir, no pueden admitirse costes no justificados, pues el término “estricto coste” impone sobre el operador la prueba de su existencia. La mera relación de un coste en una lista no permite su consideración sin más justificación.* Es necesario que el operador móvil justifique la inclusión de un coste como necesario para la prestación de este servicio de localización.
3. *Causalidad. Es decir, que sólo pueden admitirse aquellos costes cuyo único motivo de existencia para el operador sea el suministro del servicio de localización móvil de emergencias.* El estricto coste es aquél que se produce “necesariamente” en el desarrollo de la actividad de localización de llamadas. No puede admitirse, por tanto, que se repercutan porcentajes sobre los costes que los distintos operadores móviles tienen en sus otras y principales actividades, ya sean de localización para servicios comerciales o para otro tipo de servicios. Los costes que el operador deba soportar al margen del servicio de localización de emergencias, no pueden repercutirse en la contraprestación económica a la que tienen derecho como consecuencia de lo establecido en la Orden de 14 de octubre de 1999, sino que sólo podrán repercutir aquel coste que aparece con causa en el suministro de este servicio de localización de emergencias.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Quinto.- Análisis de los costes presentados por TME para la prestación del servicio de localización de llamadas.

TME en su escrito de fecha 16 de mayo de 2003 presentaba un desglose de partidas de costes imputadas al servicio de llamadas de urgencia al número 112. Concretamente, la imputación de dichos costes daba como resultado dos cuotas, una inicial de establecimiento o set-up y otra anual de mantenimiento. Las partidas relativas al set-up que se han comunicado a esta Comisión incluyen partidas de inversión específica para el servicio 112, así como otras que corresponden a recursos de las plataformas de localización que se comparten con otros servicios, bien de tipo comercial o de servicios que requieren de encaminamiento (091, 010, 092...). De esta forma algunas inversiones se han realizado con carácter exclusivo para el servicio 112, imputándose en su totalidad, y otras inversiones resultan compartidas con otros servicios, con lo que su imputación se hace en un porcentaje determinado. De esta forma resulta una inversión específica de 245.167 euros, la cual se imputa en su totalidad, y una inversión compartida de 4.227.776 euros, de los cuales sólo se imputarán un total de 359.361 al servicio de localización 112. El desglose específico por partidas se detalla en la siguiente tabla.

CUOTA SET-UP	EUROS
Inversión GMLC específica (1)	245.167
Desarrollo SW lógica para SCP	165.412
Cliente demo 112	7.513
Mejora sistema posicionamiento	72.242
Inversión GMLC compartida	4.227.776
Plataforma de localización	1.045.761
Desarrollo lógica GMLC	449.557
Service Control Point	2.298.627
Conexiones IP	1.142
Desarrollo GMLC 2.0	193.954
Desarrollo GMLC 3.0	238.734
Inversión GMLC compartida repercutida (2)	359.361
TOTAL INVERSIÓN IMPUTABLE (1+2)	604.528

En relación con la cuota de mantenimiento, se imputa un total de 139.022 euros, que corresponden, según se detalla en el escrito de fecha 25 de junio de 2003, al 15% anual sobre la partida de inversión total y una cuota por localización calculada por un promedio anual de cuatro millones de localizaciones del 112.

De acuerdo con lo establecido en el fundamento anterior, se necesita que estos costes presentados por TME se ajusten al concepto de estricto coste. En



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

relación con el principio de causalidad, TME, en el escrito de fecha 25 de julio justifica la necesidad de imputar los anteriores costes puesto que son los únicos necesarios para la prestación de este servicio. En relación con los costes específicos que se han tenido que desarrollar para poder implementar este servicio de localización 112, TME justifica la necesidad de actualizar los mecanismos de encaminamiento de la llamada con la actualización del número de SCP⁴ e implantación de la lógica específica del servicio en dichos nodos, así como la necesidad de desarrollar un entorno de pruebas para la validación en maqueta de los desarrollos implementados. Sin las anteriores inversiones específicas no sería operativo el servicio de localización geográfica.

Sobre la inversión compartida, se ha valorado en términos de un porcentaje de uso de dichas infraestructuras estimado en función del volumen de llamadas del 112 frente al volumen total de todos los servicios que utilizan la localización, para un periodo de cinco años. Si se aplicara un criterio estricto de imputación de costes en función del uso real actual de la plataforma de localización, la proporción de inversión compartida imputable al 112 debería situarse en un porcentaje mucho más elevado del realmente imputado. Se desprende, por tanto, de la documentación aportada por TME, que se ha justificado suficientemente los costes imputados como necesarios para el desarrollo de esta actividad de localización.

Sobre el criterio de eficiencia, TME justifica que el desarrollo implementado cumple los parámetros definidos en el protocolo POSIC 112, desarrollado con objeto de que se definiesen parámetros objetivos y eficientes, de forma que no se trasladara ninguna ineficiencia a los centros de emergencia 112. De esta forma, las infraestructuras utilizadas, la arquitectura del servicio y la propia operativa responden a los requisitos técnicos y funcionales del protocolo POSIC 112 desarrollado por TME y posteriormente adaptado y consensuado por el resto de operadores móviles justo con los representantes de las CCAA, al objeto de que se homogeneizase y anticipase una solución al problema de la localización.

Sexto.- Reparto del coste entre las distintas Comunidades Autónomas.

TME presentó a las distintas Comunidades Autónomas el reparto del coste desarrollado en el punto anterior, de forma que cada una hacía frente a una parte determinada del set-up y de la cuota de mantenimiento. Sobre este extremo, las partes no han manifestado disconformidad alguna con lo que, en cumplimiento del principio de intervención mínima, esta Comisión no entrará a conocer sobre este punto.

⁴ Service Control Point.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Séptimo.- Alegaciones al trámite de audiencia de las Comunidades Autónomas.

Tal y como se recoge en el antecedente de hecho séptimo, algunas CCAA plantean que no puede aceptarse la interposición de un conflicto cuando una de las partes, en este caso la propia Comunidad Autónoma no ha manifestado su disconformidad. En primer lugar, parece conveniente recordar el artículo 6 de la Orden de 14 de octubre de 1999 sobre condiciones de suministro de información relevante para la prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número 112 que establece que *“las condiciones de suministro de la información que no hayan sido establecidas expresamente en esta Orden, serán materia de convenio entre las entidades prestatarias titulares del servicio y los operadores obligados. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones resolverá las controversias que puedan surgir entre las partes”*. Pues bien cuando las Comunidades Autónomas solicitan a la CMT que se pronuncie mediante consulta en torno al concepto de “estricto coste” que las CCAA deben asumir por los servicios recibidos de los operadores móviles, también señalan que tras haber analizado los importes que por este concepto presentan los operadores móviles, les parecen excesivos con respecto a los que procederían de acuerdo con la normativa vigente. Pues bien estas declaraciones ponen de manifiesto un desacuerdo entre las CCAA y los operadores móviles. Poco importa que esta desavenencia se ponga de manifiesto directamente entre las partes implicadas o no. Una vez que el procedimiento de consulta se inicia, los operadores móviles tienen conocimiento fehaciente de tal desavenencia y, en uso de su derecho, TME solicita a la CMT que resuelva la controversia, tal y como se tramita en el presente expediente. Lo que es obvio es que la consulta planteada por las CCAA se resuelve a través del conflicto planteado, con la única diferencia de que el pronunciamiento del Consejo de la Comisión en este caso es vinculante para las partes como consecuencia de la ejecutividad propia de todo acto administrativo, particularidad esta que no se da en las simples consultas.

En cuanto a la segunda alegación relativa a la disconformidad con la posible revisión de los costes actualmente presentados en función de la contabilidad presentada más adelante por los operadores móviles, se acepta tal y como ha quedado reflejado en los fundamentos anteriores.

Por cuanto antecede, esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en el ejercicio de sus funciones



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

RESUELVE:

Único.- El coste estricto que TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. podrá cobrar en su conjunto a las entidades prestatarias del servicio de emergencia 112 será 604.528 euros por el establecimiento del servicio y una cuota anual de 139.022 euros como cuota de mantenimiento.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el Artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el presente certificado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante esta Comisión en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación o, directamente, recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.ocho de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, la Disposición adicional cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 del la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

EL SECRETARIO,

Vº.Bº. EL PRESIDENTE,

Jaime Velázquez Vioque.

Carlos Bustelo García del Real.